

**EXPEDIENTE: IEEM/SE/AE/17/2014**

Toluca de Lerdo, México, a once de febrero de dos mil quince.

**VISTOS** para resolver los autos que integran el expediente del asunto especial número **IEEM/SE/AE/17/2014**, formado con motivo del posible incumplimiento de los requisitos establecidos en la Convocatoria para la integración de las Juntas Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de México, para el Proceso Electoral en curso; por parte del **C. Miguel Ángel Ayala Sánchez**, designado como Vocal Ejecutivo de la Junta Municipal número 105, con sede en Tlalnepantla de Baz, México; y

**R E S U L T A N D O**

1. En sesión extraordinaria celebrada el cinco de agosto de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, aprobó el acuerdo número **IEEM/CG/16/2014**, relativo al Programa General para la Integración de las Juntas Distritales y Municipales, para el Proceso Electoral 2014-2015, el cual contiene los lineamientos para la designación de los vocales de dichos órganos, así como la convocatoria respectiva.
2. La convocatoria señalada en el resultando anterior, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, "Gaceta del Gobierno" en fecha once de agosto del año dos mil catorce, publicación que se realizó en los estrados del Instituto y en la página electrónica oficial y se mantuvo a partir de la fecha citada, hasta el treinta y uno de octubre de esa anualidad.
3. Entre el dieciocho de agosto y el veinticuatro de octubre de dos mil catorce, se desarrolló, en sus distintas fases, el procedimiento para la integración de las propuestas de los Vocales Distritales y Municipales.
4. El veintinueve de octubre del año dos mil catorce, se recibió en la Secretaría Ejecutiva del Instituto el oficio sin número fechado el día próximo anterior, suscrito por el Lic. Pedro Zamudio Godínez, Consejero Presidente del Consejo General, y los CC. Dra. María Guadalupe González Jordan, Mtra. Palmira Tapia Palacios, y, Dr. Gabriel Corona Armenta, Consejeras Electorales y Consejero Electoral, respectivamente, del Consejo General, a través del cual dichos funcionarios solicitaron al Secretario Ejecutivo girara oficio de colaboración al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para que informara cuáles de los aspirantes a Vocales Distritales y Municipales que serían designados, pudieran tener relación laboral con los ayuntamientos de los municipios en los que se encontraban participando.
5. En cumplimiento a dicha solicitud, mediante oficio número **IEEM/SE/0810/2014**, de fecha veintinueve de octubre del año dos mil catorce, el Secretario Ejecutivo

solicitó al Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, la información indicada en el resultando que antecede.

6. El día cinco de noviembre de dos mil catorce, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto, el oficio número OSFEM/UAJ/SCA/DAL/2084/2014, fechado el treinta de octubre de la misma anualidad, a través del cual el Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, hizo llegar la información que se obtuvo de la búsqueda en los archivos de la nómina remitida por las entidades fiscalizables, con relación a los aspirantes designados como vocales que podían tener relación laboral con los ayuntamientos, con corte al mes de septiembre del año dos mil catorce. No obstante, el referido funcionario también señaló que la entidad a su cargo no podía pronunciarse sobre la veracidad de dicha información, toda vez que la misma se obtenía de documentos digitalizados y no había sido confrontada con los originales respectivos, los cuales obran en poder de las entidades fiscalizadas.

7. En sesión extraordinaria de fecha siete de noviembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, mediante acuerdo número IEEM/CG/68/2014, designó a los Vocales de las Juntas Municipales para el Proceso Electoral 2014-2015, entre quienes resultó nombrado el C. Miguel Ángel Ayala Sánchez, con el carácter de Vocal Ejecutivo de la Junta Municipal número 105, con sede en Tlalnepantla de Baz, México.

8. En vista de lo anterior, el siete de noviembre de la presente anualidad, el Presidente y los Consejeros Electorales señalados en el resultando 4, solicitaron al Secretario Ejecutivo girara oficio de colaboración a los ayuntamientos correspondientes, para que informaran sobre la posible existencia de relación laboral entre estos últimos y los aspirantes cuyos nombres se acompañaban a la solicitud de mérito y remitieran copias certificadas de la documentación respectiva.

9. El Secretario Ejecutivo del Instituto dio cumplimiento a la solicitud anterior, entre otros, a través del oficio número IEEM/SE/1694/2014, de fecha trece de noviembre de dos mil catorce, por el que requirió al Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, México, informara si el C. Miguel Ángel Ayala Sánchez, laboró o labora actualmente para dicha autoridad y, en su caso, el tiempo de duración de la relación de trabajo y el cargo o puesto que desempeñaba, acompañando los documentos que corroboren su dicho.

10. Por oficio número PM/574/2014, recibido el dieciocho de noviembre de dos mil catorce en la Oficialía de Partes del Instituto, el M. en A. P. Pablo Basañez García, Presidente Municipal Constitucional de Tlalnepantla de Baz, México, hizo de conocimiento que el C. Miguel Ángel Ayala Sánchez, laboró para la administración municipal en el periodo comprendido entre el uno de mayo de dos mil trece, al treinta y uno de octubre de dos mil catorce.

11. Por acuerdo de la Secretaría Ejecutiva emitido el uno de diciembre de dos mil catorce, se ordenó que con las constancias atinentes se integrara el expediente del asunto especial número IEEM/SE/AE/17/2014, así como que se diera vista al ciudadano cuya designación se cuestiona, para que en un plazo de setenta y dos horas contadas partir de la notificación, desahogara por escrito su garantía de audiencia, manifestando lo que a su derecho conviniera y ofreciendo las pruebas documentales que para esos efectos estimara convenientes.

12. El día dos de diciembre del año próximo pasado, se le notificó personalmente al C. Miguel Ángel Ayala Sánchez el acuerdo señalado en el resultando anterior, así como los anexos correspondientes.

13. El cuatro de diciembre de dos mil catorce, el C. Miguel Ángel Ayala Sánchez presentó escrito ante la Oficialía de Partes de este Instituto, con el objeto de desahogar la garantía de audiencia previamente notificada; anexando copia certificada de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local, número JDCL/5/2014.

14. A través del acuerdo emitido el cinco de diciembre del año dos mil catorce, se dio cuenta del escrito presentado por el C. Miguel Ángel Ayala Sánchez, ordenándose agregar a los autos el mismo, quedando los autos a disposición del Secretario Ejecutivo para la elaboración del correspondiente proyecto de resolución.

15. La Presidencia de la Comisión Temporal de Vinculación con Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, en sesión ordinaria de fecha veintitrés de enero de dos mil quince, presentó ante sus integrantes el presente proyecto de resolución, ordenando la propia Comisión su remisión al Consejo General, para su aprobación definitiva, en su caso.

## **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. Competencia.** Con fundamento en los artículos 174 fracción I, 175 y 185 fracción VI del Código Electoral del Estado de México; en el apartado "5. Lineamientos para la designación de vocales" del Programa General para la Integración de las Juntas Distritales y Municipales, para el Proceso Electoral 2014-2015; en la Bases Séptima párrafo segundo y Décima primera párrafo tercero de la Convocatoria respectiva; y en el punto TERCERO del acuerdo número IEEM/CG/68/2014, este Consejo General se encuentra facultado para designar a los vocales de dichos órganos desconcentrados y, en su caso, para sustituirlos; por tanto, es competente para conocer y resolver el presente asunto, toda vez que se trata del procedimiento instaurado con motivo de la posible sustitución de un ciudadano designado como vocal municipal del Instituto, por el presunto incumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria de mérito.

**SEGUNDO. Cuestión Previa.** La reforma en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, introdujo múltiples adecuaciones al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo para el presente caso, tener en consideración las acaecidas al artículo 1º constitucional.

De acuerdo con el párrafo primero de dicho precepto, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que ella misma establece.

Por su parte, el párrafo segundo del artículo, bajo análisis establece que las normas concernientes a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, siempre a favor de que a las personas se conceda la mayor protección. En consonancia con ello, el párrafo tercero ordena a todas las autoridades, acorde a sus competencias, respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que los informan, a la vez que les impone obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones.

Así, es posible sostener que los párrafos segundo y tercero del artículo 1º constitucional, se instituyen como una norma guía para todas las autoridades del país, a efecto de que éstas velen en todo momento por los derechos humanos, adoptando las acciones más adecuadas para ello, conforme a sus respectivas atribuciones.

En la especie, los artículos 35, fracción VI, de la Carta Magna, 23, párrafo 1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 25, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen el derecho fundamental a ser nombrado para cualquier empleo o comisión público, en condiciones de igualdad, teniendo las calidades que establezca la ley. Tal derecho incluye el particular de acceso a los órganos electorales, cuya tutela exige que los ciudadanos puedan acceder a formar parte de éstos, ya sean de máxima dirección —es decir de carácter central— o desconcentrados, tanto de las autoridades administrativas como de las jurisdiccionales de la materia, según ha razonado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 11/2010, publicada en las páginas 27 y 28 de la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, año 3, número 6, correspondiente a 2010, cuyos rubro y texto se citan a continuación:

**INTEGRACIÓN DE AUTORIDADES ELECTORALES. ALCANCES DEL CONCEPTO PARA SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL.**—De la interpretación

sistemática y funcional de los artículos 17; 35, fracción II; 41, párrafo segundo, base VI; 99, párrafos segundo, cuarto y octavo, y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 189, fracción I, incisos d) y e); 195, fracciones III y XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 79, párrafo 2, y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y a fin de dar efectividad al sistema integral de medios de impugnación en materia electoral, se advierte que el derecho ciudadano a poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley, incluye aquellos relacionados con la función electoral, es decir, su tutela exige que los ciudadanos puedan acceder a formar parte como integrantes de los órganos, de máxima dirección o desconcentrados, de las autoridades administrativas o jurisdiccionales electorales estatales.

**Cuarta Época:**

*Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-4/2010. Acuerdo de Sala Superior.—Actor: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz.—10 de febrero de 2010.—Mayoría de seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Disidente: Manuel González Oropeza.—Secretario: Luis Alberto Balderas Fernández.*

*Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1/2010.—Actor: Jorge Luis Benito Guerrero.—Autoridad responsable: Dirección de Organización Electoral de la Dirección General del Instituto Electoral del Estado de Puebla.—17 de febrero de 2010.—Mayoría de votos.—Ponente: María del Carmen Alanís Figueroa.—Disidentes: Flavio Galván Rivera y Manuel González Oropeza.—Secretario: Carlos Vargas Baca.*

*Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-6/2010.—Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Sala Uniinstancial del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Zacatecas.—17 de febrero de 2010.—Mayoría de seis votos, con el voto concurrente del Magistrado Flavio Galván Rivera.—Ponente: María del Carmen Alanís Figueroa.—Disidente: Manuel González Oropeza.—Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías.*

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta y uno de marzo de dos mil diez, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Del mismo modo, la máxima autoridad jurisdiccional electoral del país ha sostenido reiteradamente que los derechos contenidos en el artículo 35, de la Carta Magna, son de base constitucional y de configuración legal, y que no son absolutos ni ilimitados, sino que pueden estar sujetos a ciertas y determinadas restricciones previstas en la ley, pero siempre que éstas no sean irrazonables, desproporcionadas, caprichosas ni arbitrarias, y que no afecten su contenido esencial. Dicho criterio deriva de las resoluciones recaídas a los expedientes SUP-JRC-126/2001, SUP-JRC-127/2001 y SUP-JRC-128/2001, acumulados; SUP-JDC-494/2012, SUP-JDC-3234/2012, SM-II-JDC-011/2000, SM-II-JDC-096/2000 y SM-II-JDC-097/2000, por mencionar sólo algunas.

En consecuencia, de la interpretación de los artículos 35, fracción VI, de la Constitución General de la República, 23, párrafo 1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 25 inciso c) del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos, con relación a los párrafos segundo y tercero de la misma Ley Suprema, se desprende que las autoridades en la materia tienen el deber jurídico de respetar y hacer vigentes los derechos humanos de carácter político-electoral, entre los que se encuentra el de acceso a los cargos públicos electorales, mediante las acciones que fuesen necesarias para dar vigencia o efectividad a tales derechos, pero también absteniéndose de realizar cualquier acto que los vulnere o haga los nugatorios de cualquier manera.

Ahora bien, en términos de los artículos 41, Base V, Apartados A y C, y 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 168, 169 párrafo primero, 173, 174, 178, 185, fracciones I y VI, 205, 206, 207, 208, fracción I, 209, 214, 215, 216, 217, fracción I y 218, del código comicial local, el Instituto Electoral del Estado de México es el organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en la entidad. En el ejercicio de dicha función, serán principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalismo. Además, el Instituto se regirá para su organización, funcionamiento y control por las disposiciones constitucionales relativas, las que emita el Instituto Nacional Electoral, las que le resulten aplicables y las del código de la materia.

El Consejo General, es el Órgano Superior de Dirección del Instituto, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en la materia, de promover la cultura política democrática, y velar por que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalismo guíen todas las actividades de la institución.

Dicho órgano tiene entre sus atribuciones la de expedir los reglamentos interiores, programas, lineamientos y demás disposiciones necesarias para el buen funcionamiento del Instituto; y la de designar a los vocales de las juntas distritales y municipales, de entre las propuestas que al efecto presente la Junta General y conforme a los lineamientos que emita el propio órgano superior de dirección.

Señalado lo anterior, es conveniente precisar que, las Juntas Distritales y Municipales son los órganos desconcentrados de carácter temporal del Instituto, a través de los cuales ejerce éste sus funciones en cada uno de los distritos electorales locales y cada uno de los municipios de la entidad; por tanto, intervienen en la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos comiciales en cada una de sus respectivas demarcaciones, mediante las atribuciones que la ley y la normatividad reglamentaria les conceden. Dichos órganos se integran por un Vocal Ejecutivo, un Vocal de Organización Electoral y un Vocal de Capacitación, quienes también forman parte del Consejo Distrital o Municipal

respectivo; el primero de esos funcionarios en calidad de presidente y los dos restantes con el carácter de secretario, ya sea de manera habitual en el caso del Vocal de Organización, o como suplente, en tratándose del Vocal de Capacitación.

No existe disposición alguna en el Código Electoral que prevea expresamente los requisitos para ser Vocal de las Juntas Distritales y Municipales. Sin embargo, dicho ordenamiento sí señala los requisitos que deben cumplir los miembros de los consejos respectivos, que serán los mismos que deben satisfacer los consejeros del Consejo General del Instituto, salvo el de residencia efectiva, que se entenderá referido al distrito o al municipio de que se trate, y el de título profesional que no será necesario.

En ese contexto, el Consejo General de conformidad con el artículo 185 fracción I, del Código Electoral del Estado de México, puede expedir los reglamentos interiores, programas, lineamientos y demás disposiciones que sean necesarias para el buen funcionamiento, debiendo respetar el principio de legalidad y de supremacía constitucional, para que las normas que emita sean en estricto cumplimiento de la ley, estando subordinados a ésta, entre ellas las relacionadas con las que deban ser aplicables para la designación de Vocales Distritales y Municipales.

Con base en dicha facultad, este Consejo General, en su sesión extraordinaria celebrada el cinco de agosto de dos mil catorce, aprobó el acuerdo número **IEEM/CG/16/2014**, denominado "Programa General para la Integración de las Juntas Distritales y Municipales del Proceso Electoral 2014-2015", el cual contiene los lineamientos en mención, el procedimiento para designar las vocalías de los referidos órganos desconcentrados, y la convocatoria dirigida a los ciudadanos que aspiraran a ocupar esos cargos.

Dicha convocatoria señala, entre otras, los requisitos que debían cumplir los ciudadanos interesados en participar, quedando incluidos en sus Bases Primera y Tercera, fracción XIII, las cuales establecen:

**"Primera. De los participantes.**

Podrán participar todos los ciudadanos del Estado de México, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles, inscritos en el Padrón Electoral del Estado de México, con residencia en el municipio y distrito electoral local donde pretenden prestar sus servicios, **que no cuenten con empleo remunerado alguno al día de su designación y que estén interesados en ocupar un puesto eventual de tiempo completo**, con funciones directivas en alguna de las juntas distritales y municipales del Instituto Electoral del Estado de México; para atender todo lo relativo al Proceso Electoral 2014-2015, considerado lo establecido en el artículo 413 del Código Electoral del Estado de México."

**"Tercera. De los requisitos.**

De conformidad con lo dispuesto, los ciudadanos interesados en participar deberán cumplir los siguientes requisitos:

...  
XIII. No tener relación laboral con la administración municipal correspondiente a su ámbito territorial por el cual compite, al momento de la publicación de la presente convocatoria.  
..."

De los requisitos en cita se derivan dos condicionantes para tenerlos por cumplidos, no contar con un empleo remunerado alguno al día de la designación y no tener una relación laboral con los municipios al momento de la publicación de la convocatoria respectiva.

Sobre dichas exigencias el Tribunal Electoral del Estado de México, se pronunció mediante las resoluciones recaídas a los Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano Local, identificadas con las claves RA/9/2014, JDCL/43/2014 y JDCL/44/2014, cuyos criterios sirven de apoyo y resultan orientadores para la resolución del presente asunto, pero especialmente en la resolución recaída al expediente JDCL/5/2014, el cual por promovido por el ahora objetado, el C. Miguel Ángel Ayala Sánchez.

En esencia el órgano jurisdiccional electoral sostuvo que al ser emitidos el Programa General y la convocatoria atinente, en ejercicio de la facultad reglamentaria que le concede el artículo 185, fracción I, del código de la materia, el Consejo General del Instituto estaba compelido a respetar los principios de reserva de ley y supremacía constitucional.

En este orden, señaló que el artículo 116, fracción IV, inciso c), numeral 2º, de la Constitución General de la República establece un principio de reserva de ley, según el cual los requisitos que deben cumplir los ciudadanos que aspiren a ser consejeros de los órganos administrativos electorales locales, deben estar previstos en un ordenamiento que tenga el rango de ley; asimismo, que el artículo 11, de la Constitución particular del Estado de México, también establece ese principio de reserva, en cuanto que la organización y funcionamiento del Instituto Electoral del Estado de México, serán determinadas por la ley respectiva. Así, a efecto de salvaguardar el citado principio de reserva, el artículo 178, del Código comicial local, establece los requisitos que deben reunir los consejeros del Consejo General del Instituto, mientras que el diverso numeral 218, señala que los consejeros de los Consejos Municipales, deberán satisfacer esos mismos requisitos, salvo el de residencia efectiva, que se entenderá referido al municipio de que se trate, y el de título profesional, que no será necesario.

De este modo, la máxima instancia jurisdiccional electoral de la entidad, con apoyo en el criterio que ella misma sostuvo en el diverso juicio ciudadano **JDCL/5/2014**, declaró que, la fracción XIII, de la Base Tercera "No tener relación laboral con la administración municipal correspondiente a su ámbito territorial por el cual



compite, al momento de la publicación de la presente convocatoria", era ilegal porque contiene una restricción absoluta respecto de la relación laboral entre el aspirante a vocal y administración pública municipal; esto con independencia de clase y grado de relación laboral existente entre el aspirante y la administración pública municipal, y por este simple hecho el ciudadano no podría participar en el proceso de selección de Vocales Distritales y Municipales.

Así las cosas, con base en los criterios sustentados por el Tribunal Electoral local es dable concluir que los requisitos establecidos en la fracción XIII de la Base Tercera de la Convocatoria para la designación de vocales de las Juntas Distritales y Municipales, es ilegal y, por tanto, no es exigible a los ciudadanos que eventualmente lleguen a ocupar esos cargos, ya que no deriva de un ordenamiento con rango de ley, y en esta virtud, contraviene el principio de reserva legal implícito en la facultad reglamentaria que el artículo 185 fracción I del código de la materia concede al Consejo General del Instituto, además de que el requisito en mención establece una restricción absoluta en perjuicio de los interesados, al no especificar la clase o el grado de la relación laboral que deben tener para incurrir en el incumplimiento de dicho requisito.

**TERCERO. Estudio del caso.** Establecido lo anterior, cabe destacar que al existir una sentencia ejecutoriada dictada en el Juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano JDCL/5/2014, misma que como ya se ha señalado fue interpuesto por el C. Miguel Ángel Ayala Sánchez, se está frente a la institución denominada "cosa juzgada" (del latín *res judicata*). Se arriba a dicha conclusión en virtud de que la instauración del presente asunto, deriva de la información remitida por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, con corte al mes de septiembre del año en curso, el cual versa sobre el incumplimiento a la fracción XIII, de la Base Tercera de la multicitada convocatoria, siendo evidente la identidad de sujeto y objeto.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido, a través de la Jurisprudencia número 12/2003, lo siguiente:

**COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA.** - La cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. Los elementos uniformemente admitidos por la doctrina y la jurisprudencia, para la determinación sobre la eficacia de la cosa juzgada, son los sujetos que intervienen en el proceso, la cosa u objeto sobre el que recaen las pretensiones de las partes de la controversia y la causa invocada para sustentar dichas pretensiones. Empero, la cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos maneras distintas: La primera, que es la más conocida, se denomina eficacia directa, y opera cuando los citados elementos: sujetos, objeto y causa, resultan idénticos en las dos controversias de que

se trate. La segunda es la eficacia refleja, con la cual se robustece la seguridad jurídica al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa; esto es, la tendencia es hacia la inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto de la contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres clásicas identidades, sino sólo se requiere que las partes del segundo proceso hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero; que en ésta se haya hecho un pronunciamiento o tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre algún hecho o una situación determinada, que constituya un elemento o presupuesto lógico, necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto del conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que se asumiera criterio distinto respecto a ese hecho o presupuesto lógico relevante, pudiera variar el sentido en que se decidió la contienda habida entre las partes; y que en un segundo proceso que se encuentre en estrecha relación o sea interdependiente con el primero, se requiera nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto lógico, como elemento igualmente determinante para el sentido de la resolución del litigio. Esto ocurre especialmente con relación a la causa de pedir, es decir, a los hechos o actos invocados por las partes como constitutivos de sus acciones o excepciones. Los elementos que deben concurrir para que se produzca la eficacia refleja de la cosa juzgada, son los siguientes: a) La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente; b) La existencia de otro proceso en trámite; c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar estrechamente vinculados o tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios; d) Que las partes del segundo hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero; e) Que en ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio; f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico, y g) Que para la solución del segundo juicio requiera asumir también un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado.

#### **Tercera Época:**

*Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-155/98.—Partido Revolucionario Institucional.—23 de diciembre de 1998.—Unanimidad en el criterio.*

*Recurso de apelación. SUP-RAP-023/2000.—Aguiles Magaña García y otro.—21 de junio de 2000.—Unanimidad de votos.*

*Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-017/2003.—Partido de la Sociedad Nacionalista.—27 de febrero de 2003.—Unanimidad de seis votos.*

La Sala Superior en sesión celebrada el treinta y uno de julio de dos mil tres, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, páginas 9 a 11.

Por lo tanto este Consejo General considera que actualiza la cosa juzgada de eficacia directa, siendo inválido pronunciarse nuevamente sobre la litis planteada en el presente asunto.

Visto lo anterior y atento a las constancias respectivas, con fundamento en los artículos 174 fracción I, 175 y 185 fracción VI del Código Electoral del Estado de México; en el apartado "5. Lineamientos para la designación de vocales" del Programa General para la Integración de las Juntas Distritales y Municipales, para el Proceso Electoral 2014-2015; en la Bases Séptima párrafo segundo y Décima primera párrafo tercero de la Convocatoria respectiva; y en el punto TERCERO del acuerdo número IEEM/CG/68/2014, este órgano superior de dirección.

## **RESUELVE**

**PRIMERO.** Queda subsistente el nombramiento del C. Miguel Ángel Ayala Sánchez, como Vocal Ejecutivo de la Junta Municipal número 105, con sede en Tlalnepantla de Baz, México, en términos de lo razonado en el considerando **SEGUNDO** y **TERCERO** de la presente resolución.

**SEGUNDO.** No ha lugar a proponer la sustitución del C. Miguel Ángel Ayala Sánchez, como Vocal Ejecutivo de la Junta Municipal número 105, con sede en Tlalnepantla de Baz, México, en atención a las consideraciones expresadas en los considerandos **SEGUNDO** y **TERCERO** de la presente resolución.

**NOTIFÍQUESE** personalmente al **C. Miguel Ángel Ayala Sánchez** y por estrados la presente resolución, lo anterior por conducto de la Secretaría Ejecutiva.

**ARCHÍVESE** en su oportunidad como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los CC. Consejeros integrantes presentes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en sesión extraordinaria de fecha once de febrero del año dos mil quince.

**"TU HACES LA MEJOR ELECCIÓN"**

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL  
LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ**

**EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL  
M. EN A. P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL**

VMCT/avm/jldle

IEEM/SE/AE/17/2014